



Proceso	Pertenencia
Demandante	Omaira Nohemí Erazo Pérez
Demandado	Mario Fernando Paz Portilla y Personas Indeterminadas
Radicado	05360 31 03 001 2023 000007 01
Procedencia	Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No.
Decisión	Confirma 074
Tema	Nulidad por indebida notificación.
	Medios electrónicos Afirmación bajo juramento. Ley 2213 de 2022. Por manera que, aún en esta oportunidad tampoco se hace la manifestación bajo juramento, y conviene recordar que, frente a este tipo de expresiones, y en especial cuando durante la vigencia del artículo 318 primigenio del C. de Procedimiento Civil se hacía referencia a tal exigencia, recordó el Dr. José Fernando Ramírez Gómez que <i>“Con anterioridad a la expedición del decreto 2282 de 1989, la Corte, en forma reiterada venía sosteniendo que el debido emplazamiento suponía que en el memorial en que éste se impetrara, se expresara textualmente la ignorancia de los lugares de habitación y trabajo de quien debía ser notificado personalmente, así como su no figuración en el directorio telefónico, o su ausencia y desconocimiento del paradero: “Manifiesto bajo la gravedad del juramento ...”, sería el comienzo de un memorial de esta clase, bajo la técnica de la doctrina de la Corte que en torno a las pautas de la reforma conserva vigencia porque a esa sana jurisprudencia ninguna variante se le introdujo en la nueva redacción del art. 318. Desde luego que esa forma de manifestación no sólo vale con respecto al art. 318, sino con relación a todas las normas que consagran actos procesales sujetos a manifestaciones bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la solicitud”.</i>

2023-096

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, veintiuno (21) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Omaira Nohemí Erazo Pérez frente al auto del 4 de agosto del año en curso, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad Itagüí que declaró la nulidad de lo actuado por haberse incurrido en indebida notificación en del proceso de pertenencia que promovió en contra de Mario Fernando Paz Portilla y personas indeterminadas.

I. ANTECEDENTES

1. Omaira Nohemí Erazo Pérez presentó demanda contentiva de pretensión de pertenencia, la que fue admitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí por auto del 20 de enero del año en curso. (archivo 3, C-1)

2. La notificación al propietario inscrito se hizo mediante envió al correo electrónico dajp998@gmail.com, por lo que en los términos del artículo 8º de la ley 2213 de 2022 se le tuvo por notificado el día 10 de febrero de 2023, como se dijo en providencia del 29 de marzo siguiente, en la que se resaltó que había vencido en traslado sin manifestación alguna del convocado. (archivo 23)

3. El accionado otorgó poder a profesional del derecho el presenta escrito solicitando que le fuera compartido el link para tener acceso al expediente. En proveído del 5 de mayo de 2023 se reconoce personería y se dispone remisión del expediente digital para su conocimiento. (archivo 34 y 35)

4. El 26 de junio pasado, quien agencia los derechos de Mario Fernando Paz Portilla presenta petición de nulidad con

fundamento en el numeral 8º del artículo 133 del C. General del Proceso, alegando que la notificación del auto admisorio de la demanda no se hizo como lo dispone el artículo 6º de la ley 2213 de 2022, por cuanto el correo electrónico que corresponde a su poderdante es astropaz71@hotmail.com y no el utilizado por la parte actora. Agregó que la notificación se debió haber hecho como lo disponen los artículos 291 a 293 del C. General del Proceso. (archivo 1, cuaderno contentivo trámite solicitud de nulidad)

5. Oportunamente, la parte actora se opuso a la declaratoria de nulidad indicando el 6 de julio de 2022 demandado había formulado derecho de petición a la Administración del Conjunto Cerrado Aquine IV de San Juan de Pasto (Nariño), en calidad de propietario de la casa 5, indicando como correo para recibir respuesta el dajp998@gmail.com. (archivo 3, Ibídem)

6. En providencia del 4 de agosto pasado, se declaró la nulidad de todo lo actuado a partir del auto del 29 de marzo pasado, y en su lugar se dispuso correr traslado de la demanda, en tanto la parte actora, cónyuge del accionado manifestó que su consorte utiliza varios correos electrónicos. (archivo 7, ib.)

7. Inconforme con la decisión fue recurrida en reposición y subsidiariamente apelación, por considerar que el juez reconoce que la notificación se dio en los términos de ley, por lo que mal haría en apartarse de su propio criterio para revivir una etapa procesal perdida; sin embargo, el juez al declarar la nulidad violó el debido proceso, pues no entiende el recurrente a cuál archivo se le dio “clic”, qué plataforma estaba usando y qué archivo estaba

consultando, ni está probada la falsedad del documento usado como base para la notificación.

Así mismo, la nulidad debió ser parcial, en lo relacionado con la notificación, pero no con todo lo actuado dentro del proceso, pues incluso, reviviría oportunidades procesales al acreedor hipotecario, el que no se pronunció respecto de la demanda y tampoco reprochó o apoyó la nulidad presentada. (Archivo 9, cuaderno contentivo trámite solicitud de nulidad)

8. La impugnación horizontal fue resuelta de manera desfavorable, en tanto, consideró el *a quo* que el soporte de la notificación no permite visualizar el contenido, y por ello no existe prueba de que se hubiera efectuado, reiterando que la convocante puso de presente que el demandado utilizaba diversas direcciones electrónicas. (archivo 10 ib.)

9. Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la Corporación, la que decide previa a las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. Como se sabe, es trascendental para el debido proceso que los juicios no se adelanten a espaldas del demandado. Por ello, se ha previsto un régimen estricto para que se verifique tal enteramiento que, en línea de principio, debe hacerse de manera personal. Sin embargo, puesto que no siempre es posible lograr tal cometido, para evitar la parálisis injustificada de los juicios, es válido hacerlo a través de las otras modalidades que el ordenamiento objetivo ha

dispuesto, en cuyo caso deberán satisfacerse todos los requisitos que allí se imponen¹.

2. Frente a las notificaciones personales el artículo 8º de la ley 2213 de 2023 señala que las notificaciones que deban hacerse personalmente también podrán efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, y que en caso de discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, el afectado debe manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del C. General del Proceso, cargas procesales que cumplió la parte recurrente.

3. Se trata, como dijo la Sala de casación Civil, de *“ofrecer a las partes y apoderados un trámite alterno de enteramiento acorde con los avances tecnológicos de la sociedad. Un procedimiento quizás menos oneroso en tiempo y dinero, pero igual de efectivo al dispuesto en el Código General del Proceso en el que las partes deben acudir necesariamente a empresas de servicio postal autorizadas a remitir sus citatorios y avisos”*, en que se consagran las siguientes medidas que no sólo garantizar la efectividad de una notificación más célere, y económica, sino de que estén vigentes las plenas garantías de defensa contradicción para el accionado:

“i). Como ya se vio, la primera de ellas fue la de exigir al libelista que en su demanda cumpliera las tres cargas descritas en precedencia, esto es, el juramento relativo a que el canal escogido es el utilizado por el

¹ SC5105-2020, M.P. Francisco Ternera Barrios.

demandado, la explicación de la forma en la que lo obtuvo y la prueba de esa circunstancia.

“ii). La segunda, consistió en otorgar al juez la facultad de verificar la "información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las (...) entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas web o en redes sociales" (Parágrafo 2° del art. 8 ibidem). Precepto sobre el cual se predicó en juicio de constitucionalidad que:

"(...) la medida no tiene objeto distinto al de dotar a las autoridades de herramientas acordes con los avances tecnológicos, que faciliten la obtención de la información, y lleven al interesado a conocer las actuaciones en su contra. De manera que, más que presentarse como la vía principal para obtener la información, se trata de una herramienta adicional para que el juez, como director del proceso, pueda dar celeridad al trámite (...)”². (Subrayas fuera el texto)

4. En sentencia más reciente, reiteró:

“(...) la Corte Constitucional, al estudiar la constitucionalidad de dicha normativa, en la sentencia C-420 de 2020, destacó que uno de los cambios que introdujo dicha reglamentación fue que permitió que las notificaciones se realizaran directamente. En concreto, el Alto Tribunal estableció:

"...El artículo 8° del Decreto sub examine introduce tres modificaciones transitorias al régimen de notificación personal de providencias. Primero, permite que la notificación personal se haga directamente mediante un mensaje de datos y elimina transitoriamente (i) el envío de la citación para notificación...

“...El mensaje de datos debe ser enviado “a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación” (inciso 1 del art. 8°), quien debe: **(i) afirmar bajo la gravedad de juramento “que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar”, (ii) “informar la forma como la obtuvo” y (iii) presentar “las evidencias correspondientes”**³. (Negrillas intencionales)

² STC16733-2022, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.

³ STC4204-2023, M.P. Francisco Ternera Barrios.

5. Los anteriores prolegómenos de orden jurisprudencial para resaltar que en el texto de la demanda, luego de indicarse la dirección de residencia del accionado se dijo: *“quien recibe notificaciones en dajp998@gmail.com”*, sin que en parte alguna del escrito introductorio del proceso se hiciese la manifestación bajo juramento, ni se informó la manera cómo la obtuvo, todo lo cual sucedió cuando en auto del 23 de febrero fue requerido, para que informara *“ cómo obtuvo ese correo electrónico y allegará evidencia que acredite el uso de eso correo por la parte demandada”*. (archivo 14)

La intimación fue atendida en los siguientes términos: *“no cuenta con cruce de correos electrónicos con el demandado y que solo se tiene como prueba sumaria un documento suscrito por puño y letra del señor Mario Fernando Paz Portilla en que se indica que su correo es dajp998@gmail.com, prueba documental que se aportó con el escrito de demanda, reiteramos e insistimos que se tenga tal dirección electrónica como del demandado para efectos de notificación”*. (archivo 15)

6. Por manera que, aún en esta oportunidad tampoco se hace la manifestación bajo juramento, y conviene recordar que, frente a este tipo de expresiones, y en especial cuando durante la vigencia del artículo 318 primigenio del C. de Procedimiento Civil se hacía referencia a tal exigencia, recordó el Dr. José Fernando Ramírez Gómez que *“Con anterioridad a la expedición del decreto 2282 de 1989, la Corte, en forma reiterada venía sosteniendo que el debido emplazamiento suponía que en el memorial en que éste se impetrara, se expresara textualmente la ignorancia de los lugares*

de habitación y trabajo de quien debía ser notificado personalmente, así como su no figuración en el directorio telefónico, o su ausencia y desconocimiento del paradero: “Manifiesto bajo la gravedad del juramento ...”, sería el comienzo de un memorial de esta clase, bajo la técnica de la doctrina de la Corte que en torno a las pautas de la reforma conserva vigencia porque a esa sana jurisprudencia ninguna variante se le introdujo en la nueva redacción del art. 318. Desde luego que esa forma de manifestación no sólo vale con respecto al art. 318, sino con relación a todas las normas que consagran actos procesales sujetos a manifestaciones bajo juramento, que se considera prestado con la presentación de la solicitud”⁴.

7. La doctrina procesal, dice la Corte, enseña que el proceso no es más que una serie o sucesión de actos que tiende al procesamiento de una pretensión en la que cada uno de esos actos se somete a formalidades, las que hacen referencia al modo, tiempo, lugar y al orden en que se debe realizar, y no son, como se cree, meros caprichos del legislador, son por el contrario la garantía de los derechos individuales. Couture considera que una de las garantías más importantes es la del debido proceso, con sus secuelas de garantía del a defensa, de petición, de prueba y de igualdad ante los actos procesales. Lo que se logran previa regulación de las formalidades de los actos, la única manera de hacer efectiva esas garantías. “2. *La inobservancia o la desviación de las formas legalmente establecida para regular la constitución y el debido desenvolvimiento de la relación procesal, constituyen verdaderas anormalidades que impiden en el proceso el recto cumplimiento de la función jurisdiccional. Ese incumplimiento o*

⁴ Código de Procedimiento Civil, séptima edición 2000, pág.344.

desviación de las formalidades legales lo sanciona la ley procesal. Generalmente con la nulidad del acto” (Cas. Julio 24 de 1985. M.P. Horacio Montoya Gil).

8. En conclusión, se confirmará la providencia recurrida, pero por lo expuesto en esta providencia. Sin costas en esta instancia por no haberse causado.

III. DECISION

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, CONFIRMA** el auto del 4 de agosto último, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Itagüí. Sin costas en esta instancia.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **2f415c7dc220610bdd6c93f6ccaf7b2a46c89f5e9340bb9f8756d9f1a73b12a8**

Documento generado en 22/11/2023 02:31:55 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>